



ILLA TROPIEZA CON SU PLAN PARA ACELERAR LAS RENOVABLES

Más de 12.000 alegaciones y el rechazo de más de 300 ayuntamientos y entidades dificultan su implantación en una Cataluña que apenas genera con energía limpia el 21% de su electricidad

Àlex Gubern
Barcelona



Hace apenas dos fines de semana, Salvador Illa paseaba entre interminables hileras de paneles solares en Alcarràs (Lérida), el municipio que la película de Carla Simón convirtió en símbolo de una Cataluña rural que lucha por preservar su forma de vida y que ahora alberga el mayor complejo fotovoltaico de la comunidad. La imagen encerraba buena parte de las contradicciones de la transición energética catalana.

Las 500 hectáreas cubiertas por placas solares –serán más de 650 cuando finalice la ampliación– permiten disponer ya de 300 megavatios de potencia, a los que próximamente se sumarán otros cien. El proyecto de Solaria, con una inversión hasta ahora de 105 millones de euros, prácticamente duplica de una tacada la potencia de los grandes parques fotovoltaicos instalados hasta ahora en Cataluña, al margen del autoconsumo.

Illa aprovechó la visita para admitir el problema. Cataluña se ha «distráido» durante demasiado tiempo en el desarrollo de las energías renovables. En 2025, apenas el 21,3% de la electricidad producida en la comunidad procedió de fuentes renovables, frente a cifras próximas al 50% en el conjunto de España. Más de la mitad, el 55,8%, de la energía consumida en Cataluña siguió teniendo origen nuclear.

«No tenemos petróleo, pero tenemos sol y aire», resumió el presidente, que ha convertido la aceleración de las renovables en una de las prioridades de su mandato. El problema es que el instrumento diseñado para conseguirlo, el Plan Territorial Sectorial para

la Generación Eléctrica Eólica y Fotovoltaica (Plater), ha tropezado precisamente con uno de los obstáculos que durante años ha lastrado el despliegue energético en Cataluña: un territorio densamente ocupado, políticamente organizado y extraordinariamente resistente a asumir nuevas infraestructuras. El Plater pretende poner orden donde durante años ha predominado la tramitación proyecto a proyecto. Sobre 141 capas de información territorial, ambiental, agrícola, paisajística, patrimonial y urbanística, el Govern ha dibujado las zonas en las que deberán concentrarse las instalaciones necesarias para cumplir los objetivos de descarbonización.

No va a ser fácil en una Cataluña que parte con un notable retraso en renovables. Dispone actualmente de alrededor de 3.500 MW de potencia renovable y pretende dar un salto extraordinario: la planificación energética prevé incorporar unos 12.000 MW adicionales hasta 2030, hasta superar los 15.000 MW, y alcanzar los 61.861 MW en 2050. Un despliegue destinado, entre otros objetivos, a sustituir la producción de las centrales nucleares.

A LA COLA EN RENOVABLES

21,3%

Poco más del 21 de la electricidad que se produce en Cataluña proviene de fuentes renovables, frente a cifras próximas al 50% en el conjunto de España. Más de la mitad, el 55,8%, sigue teniendo origen nuclear.

La ambición del plan es tan grande como la reacción que ha generado, obligando al Govern a introducir un segundo periodo de exposición pública. El primero concluyó el 30 de julio con más de 12.000 alegaciones y, una vez analizadas e incorporadas las que considere viables, la Generalitat someterá el documento modificado a una nueva ronda de alegaciones, todavía sin fecha. Illa promete «diálogo» y «consenso», pero en Alcarràs añadió una advertencia significativa: «El Govern tomará las decisiones que tenga que tomar, porque Cataluña no se puede permitir pararse».

Entre quienes se han movilizado figura la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, que directamente reclama retirar el Plater y establecer una moratoria para determinados proyectos mientras no exista una nueva planificación consensuada. A la contestación se han sumado Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, Ecologistes de Catalunya y diferentes plataformas locales. Las críticas coinciden en denunciar una excesiva afectación de terrenos agrícolas y espacios naturales, la concentración de instalaciones en determinadas comarcas y un modelo que, según sus detractores, favorece los grandes proyectos promovidos por compañías privadas. Las dificultades no son nuevas. Cataluña lleva años comprobando que existe un amplio consenso social sobre la necesidad de producir energía limpia que se arruina cuando hay que decidir dónde colocar molinos, placas, líneas eléctricas o instalaciones de almacenamiento.

El caso paradigmático está frente a la Costa Brava. La plataforma experimental de energía eólica marina Plemcat, proyectada frente al golfo de Rosas, ha encontrado una fuerte oposición de ayuntamientos, pescadores y entidades ambientales pese a que sus aerogeneradores se situarán a gran distancia de la costa. El estudio de impacto paisajístico calcula que desde el 91% de la superficie terrestre analizada ni siquiera serían visibles y sitúa las instalaciones a más de 20 kilómetros mar adentro. Aun así, varios ayun-



tamientos y organizaciones como Stop Macro Parc Eòlic Marí han alegado por su impacto sobre el paisaje, el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos.

Es una manifestación especialmente gráfica del efecto ‘nimby’ –«sí, pero no aquí»– que dificulta la implantación de infraestructuras en Cataluña. El resultado es paradójico: la comunidad que concentra una de las mayores demandas industriales de electricidad de España y que aspira a electrificar buena parte de su economía continúa extraordinariamente rezagada en nueva generación renovable.

Y es precisamente ese retraso el que está dando nuevos argumentos a quienes reclaman prolongar la vida de las centrales nucleares. Cataluña obtiene todavía el 55,8% de sus reactores. Ascó I tiene previsto cerrar en 2030; Ascó II, en 2032, y Vandellòs II, en 2035. Sobre el papel, el Govern de Illa mantiene ese calendario y apuesta por sustituir progresivamente esa producción mediante renovables, almacenamiento y nuevas infraestructuras eléctricas.

Pero la reciente decisión del Gobier-



no de prolongar la actividad de la central extremeña de Almaraz hasta junio de 2030 ha reabierto de lleno un debate que parecía cerrado. Y el atasco de las renovables añade presión: cuanto más difícil resulte desplegar a tiempo la nueva potencia prevista por el Plater, más complicado será justificar la desconexión de unas centrales que son las que mantienen enchufada a Cataluña.

Oficialmente, Illa continúa defendiendo el calendario pactado de cierre, pero según ha podido saber ABC, en el Govern hay consejerías que asumen ya que una prolongación de la vida de las centrales catalanas acabará resultando inevitable si el despliegue de las alternativas no permite garantizar el suministro en condiciones competitivas.

El dilema del Govern

El presidente vuelve a encontrarse así en un terreno conocido. Como sucede con la fiscalidad, la vivienda o determinadas infraestructuras, el margen del PSC está condicionado por sus apoyos parlamentarios. ERC y los Comunes mantienen posiciones contrarias

a prolongar la vida nuclear, de modo que abrir formalmente ese debate introduciría una nueva fuente de tensión en la mayoría, ajustada, que sostiene a Illa.

Fuera del Govern, en cambio, las posiciones son mucho más níticas. Fomento del Trabajo ha pedido expresamente revisar el calendario de cierre de Ascó y Vandellòs. Tras la decisión sobre Almaraz, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre reclama aplicar el mismo criterio a Cataluña. «No nos podemos permitir prescindir de una energía estable, no emisiva y esencial para la competitividad de nuestra industria», apuntan fuentes de la patronal a ABC.

La fotografía de Illa paseando entre placas en Alcarràs resume así el dilema que empieza a perseguir al Govern. La Generalitat quiere sacar a Cataluña de años de retraso en renovables y Plater es su principal herramienta. Pero las placas y los molinos necesitan territorio, y cada nuevo mapa despierta resistencias. Mientras el presidente intenta convencer de que apenas una pequeña parte de Cataluña tendrá que asumir esas instalaciones, el reloj nuclear continúa avanzando.

Salvador Illa, el pasado 29 de agosto, en la inauguración del macro parque solar de Alcarràs, en Lérida. Rubén Moreno